



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ

Bogotá D.C., veintidós (22) de julio de dos mil diecinueve (2019)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2018-00372
PROCESO: EJECUTIVO
EJECUTANTE: RAFAEL ORDUZ BOHORQUEZ
EJECUTADA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP
PROCESO NYR: 11001-33-31-026-2010-00459-00

La parte ejecutante, actuando a través de apoderado, ha solicitado que previo los tramites de un proceso ejecutivo, se libre orden de pago a su favor y en contra de la **Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP**, con el fin de obtener el cumplimiento de la sentencia proferida por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la sentencia del 12 de agosto de 2011, proferida por este Despacho Judicial dentro del proceso identificado bajo el radicado No. 2010-00459.

Por lo anterior, y luego de verificado el cumplimiento de los requisitos legales que debe cumplir la demanda, este Despacho observa que no es posible en este momento dar trámite a la misma, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

Como primera medida, el artículo 104 de la ley 1437 de 2011, indica en el numeral 6to ibídem, que esta Jurisdicción conocerá, entre otros, de “*Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.*”.

En este sentido, el artículo 297 del C.P.A.C.A., prevé:

“Artículo 297. Título ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. (...)”

Ahora bien, teniendo en cuenta que en la Jurisdicción Contencioso Administrativo, tiene plena vigencia todo el articulado de la Ley 1564 de 2012, por la cual se expidió el Código General del Proceso¹, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los aspectos no regulados en el mismo se seguirán la reglas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso).

Conforme a lo anterior, se observa que el artículo 422 del Código General del Proceso, en relación a las calidades particulares del título ejecutivo, determinó frente a providencias judiciales lo siguiente:

“Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.”

Ahora bien, todos los aspectos relacionados con los presupuestos procesales de admisibilidad de las demandas que se promuevan ante esta Jurisdicción, quedaron consagrados en el Capítulo III de la Ley 1437 de 2011, señalándose los requisitos que deben reunir las mismas, y para el efecto el artículo 162 dispuso:

“Artículo 162 Contenido de la Demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

1. La designación de las partes y sus representantes.
2. Lo que se pretenda, expresando con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.
3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.

¹ CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. Consejero Ponente: ENRIQUE GIL BOTERO. Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014). Radicación número: 05001233100020110046201 (44.544). Demandante: Jerlis Antonio Mercado Castillo y otros. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional. Referencia: Acción de Reparación Directa.

7. *El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.”*

En similar sentido, el artículo 82 del Código General del Proceso, también trae consagrados los requisitos que deben contener las demandas que se promuevan **en todo proceso**, de la siguiente manera:

- “1. La designación del juez a quien se dirija.*
- 2. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos será el número de identificación tributaria (NIT).*
- 3. El nombre del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso.*
- 4. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.*
- 5. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.*
- 6. La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder, para que este los aporte.*
- 7. El juramento estimatorio, cuando sea necesario.*
- 8. Los fundamentos de derecho.*
- 9. La cuantía del proceso, cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite.*
- 10. El lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales.*
- 11. Los demás que exija la ley.”*

Así las cosas, conforme a los presupuestos que indican las normas precedentes, se observa que la parte ejecutante, manifiesta lo siguiente²:

“Conforme a lo decidido en la Sentencia, la entidad debía pagar el 02 de agosto de 202, día en que quedó ejecutoriada la providencia, la suma de \$111.184.023 por concepto de capital, es decir, las diferencias entre mesadas indexadas a que tiene derecho el señor RAFAEL ORDUZ BOHORQUEZ con ocasión al reconocimiento de una reliquidación de pensión de jubilación desde el 22 de agosto de 2003; no obstante, la entidad no dio cumplimiento al fallo en la fecha señalada, razón por la cual, se incrementó el retroactivo, pues se continuaron causando mesadas pensionales, así como los intereses moratorios de conformidad al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

La mesada pensional se reliquidó por valor de \$1.069.402, cantidad que resulta inferior a \$1.130.351 que ordenó el fallo judicial. Como se ve, ocurrió un incumplimiento defectuoso de las obligaciones pensionales, esto es así no solo porque se calculó la pensión por un monto inferior, sino porque se canceló el retroactivo por un valor menor.

² Fl. 1

El 30 de abril de 2012 la entidad realizó un pago parcial, pues desembolsó la suma de \$ 93.329.196, no obstante, lo adeudado a esa fecha correspondía a \$120.241.615.26 por concepto de capital e intereses por cuantía de \$27.220.474, para un total de \$147.462.089, es decir que la entidad adeuda la suma de \$54.132.893, misma que sigue generando intereses hasta hoy.

Ahora bien, no puede perderse de vista que según lo preceptuado por el artículo 1653 del Código Civil, cuando se adeuda capital más intereses el pago se imputará primeramente a los intereses. De ahí que los valores cancelados inicialmente fueron imputados al pago de intereses moratorios, y el restante amortiguó el capital; por lo cual se deberá librar mandamiento de pago por el capital antes mencionado, más los intereses causados y que se llegaren a causar durante el trámite de este memorial”

Así las cosas, revisado el contenido de los enunciados normativos y al realizar la verificación de tales requisitos, se pudo establecer que la demanda no cumple con la totalidad de los mismos, como se indica a continuación:

i. En primer lugar, debe decir el Despacho que la sentencia proferida en el proceso ordinario, dispuso el reajuste de la pensión del aquí ejecutante, para que dentro de la misma se tuvieran en cuenta ciertos factores de liquidación; así pues, al analizar el acto que dio cumplimiento al fallo, se observan los valores que tuvo en cuenta la entidad, y la denominación de los factores tenidos en cuenta. Sin embargo, en el líbello de la demanda ejecutiva, no se explica la razón exacta de la inconformidad con los valores tomados por la entidad o de la forma en la que se dio cumplimiento a la sentencia, siendo ello indispensable para analizar si hay lugar o no a librar mandamiento ejecutivo, y el monto respectivo.

Se debe decir que el cuadro de liquidación allegado por la activa (fls.2 a 8), no explica de donde resultan los valores pretendidos y que según ellos son los que causan la diferencia entre la sentencia y la ejecución, que en su consideración ascienden a \$136.949.453,70., no siendo en este sentido claro “lo pretendido” en la demanda, pues aun cuando se menciona un valor, este no cuenta con soporte que permita evidenciar que en efecto existe una obligación clara, expresa y exigible en cabeza de la UGPP.

Por tal razón, la activa deberá indicar con toda precisión, en qué consiste la diferencia que en su consideran existe entre el acto de ejecución y la sentencia del proceso ordinario, **señalando con exactitud los valores con los que no se encuentra de acuerdo junto con los factores salariales liquidados y ordenados en la sentencia** y que fueron determinados en la Resolución RDP 014647 del 7 de noviembre de 2012, pues no es posible para el Despacho realizar conjeturas propias para librar mandamiento de pago conforme a lo que considere, sino de acuerdo a lo solicitado por quien demanda, lo que a su turno permitirá a la entidad manifestarse y ejercer su derecho de defensa de manera puntual frente a lo pretendido.

Se hace énfasis en lo anterior, por cuanto el Profesional del derecho en la liquidación que aporta, señala como uno de los factores salariales a tener en cuenta, **la prima de vacaciones**, factor que no se incluyó para la reliquidación de la pensión de jubilación de la actora, en las sentencias que fungen como título ejecutivo.

Al respecto, debe decir el Despacho que a pesar de existir una sentencia como título ejecutivo, la obligación no dimana únicamente de este documento, en el entendido que el título en este caso es complejo y por ende para determinar un cumplimiento parcial de la sentencia y/o por ende determinar un saldo insoluto, se deben arribar los documentos que le prueben al juez necesariamente que hubo un error en la liquidación que realizó la entidad demandada para dar cumplimiento a la sentencia. Solo así, puede el juez librar mandamiento ejecutivo, pues en este momento, de la documentación aportada como prueba, únicamente se puede establecer la actitud de la demandada en pro de dar cumplimiento a la sentencia.

Por ende el interesado debe no solo arribar copia de la sentencia en los términos del art. 114 del C.G.P., sino también de la solicitud de cumplimiento dentro de los 6 meses siguientes o en el momento que se hubiese efectuado, copia completa del acto administrativo que dio cumplimiento a la sentencia, así como de la respectiva liquidación efectuada por la demandada, explicando además las inconsistencia en la liquidación y la prueba para demostrar dicho yerro.

ii. Finalmente, la demanda debe contener cada ítem indicado en el artículo 162 del C.P.A.C.A., antes transcrito, en tanto no existe justificación legal que permita omitir alguno de ellos, motivo por el cual el apoderado de la parte demandante deberá adecuar la demanda a los presupuestos contenidos en dicho artículo, en tanto la demanda carece de **todos los acápites** indicados en la norma en mención, siendo obligatoria la inclusión de cada uno de ellos.

Bajo los anteriores parámetros, las pretensiones de la demanda y los anexos de la misma deben ser ajustados, atendiendo las consideraciones realizadas, para establecer que la demanda haya sido presentada en debida forma y que la obligación cobrada cumpla con la carga de ser clara, expresa y actualmente exigible.

En virtud de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO.- INADMITIR LA DEMANDA EJECUTIVA instaurada por **RAFAEL ORDUZ BOHORQUEZ** contra la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP**.



SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, se concede a la parte demandante el término perentorio de diez (10) días, con el fin que subsane los defectos señalados en la parte motiva de este proveído, so pena de rechazarse la demanda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 170 del C.P.A.C.A.

TERCERO.- Finalmente, es del caso señalar, que también se deberá allegar en medio magnético la subsanación que se realice en los términos indicados a lo largo de este proveído, para efectos de las notificaciones electrónicas que se deben surtir con posterioridad.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

FV

 JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. Por anotación en ESTADO ORDINARIO notifico a las partes la providencia anterior hoy 23 DE JULIO DE 2019 , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)  LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA SECRETARIA

